

muy poco tiempo para redactar un contrato social dadas las condiciones particulares en Bolivia.

En consecuencia y considerando que el artículo 70 del reglamento interno de la asamblea dispone la posibilidad de que cualquier tema no solucionado por la constituyente sea puesto a consideración de la población por medio de un referéndum, es muy predecible que se pueda llegar a la situación de tener en el referéndum una lista relativamente larga de temas no resueltos, los cuales esperarán una decisión de la población. Mientras que la principal razón del referéndum es que está supuesto a poner en consideración de la población el nuevo texto completo de la Constitución.

En conclusión, las visiones de país presentadas por MAS y PODEMOS son las propuestas más representativas de la asamblea. Éstas representan las diferencias en los puntos de vista y la consecuen- te polarización de las fuerzas políticas en Bolivia y la asamblea constituyente. Empero, un análisis más detallado revela que las visiones de país, por lo menos concernientes a los principios y estructura del nuevo Estado boliviano no son tan diferentes como había de esperarse. Obviamente, ingenieros institucionalistas argumentarían, y con mucha razón, que las diferencias resaltadas son significativas en cuanto al funcionamiento del Estado. Por otro lado, la actual situación del proceso constituyente es indicativa de que serios obstáculos amenazan al avance regular del proceso, y ponen en serias dudas los resultados planteados. No solamente es preocupante las diferencias entre los dos polos políticos, si no también la forma en que las micro-fuerzas tratarán de avanzar sus preferencias y objetivos. Al mismo tiempo, y como obstáculo mayor, está el poco tiempo que la asamblea tiene para alcanzar sus objetivos. Esta situación

podría resultar en un aplazamiento de la fecha límite, como también puede forzar un colapso de la asamblea.

*Miguel A. Buitrago es investigador asociado del GIGA Institute of Latin American Studies (ILAS) en Hamburgo, Alemania. Posee una maestría en economía de la American University, Washington, DC y actualmente está escribiendo su disertación doctoral en la Universidad de Hamburgo y el ILAS sobre el proceso de descentralización y la consolidación democrática en Bolivia.*

**Eva Kalny**

## **Globalización desde abajo: desafíos al activismo anti-neoliberal en el Petén, Guatemala**

La globalización económica neoliberal y sus efectos nos confrontan con retos y transformaciones enormes en todas áreas de la vida, sean éstas sociales, económicas, políticas, jurídicas, etc. Frente al creciente entrelazamiento de los grandes poderes económicos, varios autores han expresado su esperanza acerca de la 'globalización desde abajo', un fenómeno que se expresa en los foros sociales mundiales y regionales y eventos parecidos y que implica la creación de redes y cooperaciones transnacionales.

En el caso de Guatemala, la globalización económica neoliberal se expresa a través del Plan Puebla-Panamá (PPP) y del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (TLC o DR-CAFTA, por sus signas en inglés). La resistencia más fuerte y continua contra estos planes se ha dado en el departamento del Petén y sus

activistas tienen relaciones con ONGs internacionales y entidades como el EZLN y participan en los foros sociales. Sin embargo, los datos de la investigación de campo sugieren que el activismo local no alcanza a transformar la preocupación por la globalización económica neoliberal en un movimiento y que este activismo no corresponde a lo que muchos académicos (y activistas) desean ver cuando piensan en la “globalización desde abajo”. En un nivel más generalizado, se puede concluir que la misma estructura del activismo y los intereses partidistas estructuralmente debilitan o incluso impiden el activismo local. Al mismo tiempo, la estructura del apoyo internacional coloca a las ONGs en una posición privilegiada frente a las comunidades rurales en las cuales se practican formas alternativas a la economía neoliberal. Debido a esta relación jerárquica, la misma cooperación transnacional contra la globalización económica neoliberal corre el riesgo de destruir las alternativas al neoliberalismo.

### Los planes económicos para la región

El Plan Puebla-Panamá (PPP) es un plan estratégico para el desarrollo de la economía centroamericana que fue propuesto por el gobierno mexicano a los países centroamericanos y aprobado el 15 de junio de 2001. Consiste en proyectos de *desarrollo sustentable, de desarrollo humano, de la prevención y mitigación de desastres naturales, de la promoción del turismo, de la facilitación del intercambio comercial, de la integración vial, de la integración energética y de la integración de los servicios de telecomunicaciones*. Sus oponentes opinan que el PPP prevé la construcción de represas en varios ríos de la región y temen que su realización lleve a la inundación de muchas comunidades.

El BID por su lado insiste que el PPP no va a financiar ninguna represa.

A medianos de marzo de 2005, el Congreso Guatemalteco ratificó el Central American Free Trade Agreement (abreviado oficialmente ‘DR-CAFTA’, desde el ingreso de la República Dominicana en 2004). Este acontecimiento fue acompañado por protestas en todo el país y la correspondiente represión policial. Costó la muerte de por lo menos dos personas, y más de 50 manifestantes resultaron heridos. Ya antes de la ratificación del DR-CAFTA, Amnistía Internacional expresó su preocupación por restricciones al uso de medicamentos genéricos. Oxfam América criticó que las futuras importaciones de maíz amarillo iban a destruir la base de vida de miles de campesinos que no podrían competir con este producto fuertemente subvencionado en Estados Unidos, y Human Rights Watch explicó que el convenio iba a reducir los derechos de los trabajadores. El 3 de junio de 2006, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala presentó sus observaciones acerca de la inconstitucionalidad del DR-CAFTA a la Corte de Constitucionalidad. La región de libre comercio establecida con el DR-CAFTA no permite la migración libre de las personas, y para muchos productos centroamericanos está vedado el acceso al mercado estadounidense. En el caso de Guatemala, el gobierno negoció la protección del mercado nacional únicamente para productos agrícolas producidos en las plantaciones de los grandes empresarios y élites nacionales (como el azúcar), pero esta protección no se extiende a los productos de los campesinos.

### La lucha contra la globalización económica neoliberal en el Petén

El departamento norteño guatemalteco del Petén es la región nacional con el

activismo más visible y más amplio contra la economía neoliberal. Su historia lo distingue del resto del país: contó con un plan gubernamental de desarrollo que preveía la industria de ganado en el sur y la industria extractiva en el norte del Petén. Para realizar esta política y para colonizar la región tropical, se creó la Empresa de Fomento y Desarrollo del Petén FYDEP en 1958. A principios, una parte significativa de la migración fue canalizada y organizada a través de cooperativas de campesinos empobrecidos sobre todo del oriente del país. Pero debido a la ausencia de planes de desarrollo para las otras partes del país, pronto empezó la migración espontánea al Petén. Durante las siguientes décadas de la guerra civil, los miembros de las cooperativas fueron calificados de ‘comunistas’ por el ejército y perseguidos. Los sobrevivientes de los masacres huyeron a otras partes del país, a la selva tropical o a México. A pesar de un crecimiento enorme de la población de unos 25.000 habitantes en 1964 a más de 500.000 ahora, el Petén sigue siendo el departamento menos densamente poblado del país, razón por la cual, con el fin de la guerra, una parte de las poblaciones desarraigadas y retornadas fue reasentada en el Petén.

Adicionalmente a su extensión y sus bosques tropicales, el Petén cuenta con recursos naturales como el petróleo, con riquezas arqueológicas de los tiempos precolombinos, y con extensos ríos y humedales. Los activistas temen que con los actuales procesos macro económicos, estos recursos serán aprovechados aún más por las empresas transnacionales, dejando a la población local pobreza y contaminación.

En octubre del año 2000 la GTZ organizó un Foro de Información sobre el Plan Puebla-Panamá en el Petén, con el cual quería encontrar respuestas a la pregunta “¿Qué es el PPP?”. Los organizadores invi-

taron a funcionarios gubernamentales y a la población de la región. La inquietud sobre el PPP había nacido porque miembros de ONGs habían encontrado mapas y croquis en páginas web del BID y de la Comisión Federal de Electricidad de México que mostraban planes para represas enormes en el río Usumacinta, la frontera entre el occidente del Petén y México. Según los organizadores, el gobierno guatemalteco se negó a poner información sobre estos planes a la disposición de la población. Desde entonces, varias ONGs se han preocupado por temas como las represas, las semillas genéticamente transformadas, y el DR-CAFTA. En diferentes comunidades de la región existen interés y preocupación por estos temas, y cierto descontento y temores frente a los cambios a nivel macro económico. Sin embargo, son pocas las personas involucradas en el activismo contra la economía neoliberal. Entre las organizaciones una se destaca por su activismo más visible y más amplio: la Alianza por la Vida y la Paz.

### **La Alianza por la Vida y la Paz**

La Alianza por la Vida y la Paz (“la Alianza”) es una organización coordinadora de varias ONGs, cooperativas y asociaciones, incluyendo el Frente Petenero contra las Represas y el Centro de Información y Educación Popular (CIEP). Entre los miembros de la Alianza también figuran comunidades de refugiados retornados del exilio en México, las Comunidades Populares en Resistencia del Petén (CPR-P), y la Cooperativa Nuevo Horizonte de excombatientes desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), estrechamente vinculados al Partido Alianza Nueva Nación (ANN). Según sus propias fuentes, la Alianza se consolidó el 12 de octubre de 2002 en la Coope-

rativa Nuevo Horizonte. Entre los fines de sus campañas y actividades figuran “generar discusión y opinión pública”, “construir fuerza social antisistémica”, “presionar al gobierno y organismos internacionales” y “fortalecer focos de lucha”. En la agenda de su asamblea en marzo de 2006, define como focos de lucha la amenaza de los extranjeros a la población indígena y la organización de las comunidades. Desde el año 2002, la Alianza ha reorientado y reducido su trabajo de una gama amplia de temas, que muestra influencias de diferentes grupos participantes, a la lucha contra el imperialismo como único enemigo en 2006. La organización dispone de videos informativos para la divulgación de sus temas en las comunidades, todos ellos son producidos por CIEP.

Los actores principales de la Alianza están estrechamente ligados al CIEP cuyos empleados —en su mayoría extranjeros— tienen relaciones familiares consanguíneas y políticas con miembros de la CPR-P, con la Cooperativa Nuevo Horizonte y con los dirigentes del partido Alianza Nueva Nación (ANN). En sus reuniones para la creación de la economía solidaria, la Alianza por la Vida y la Paz pone énfasis en la producción y su comercialización. Los ex combatientes de la guerrilla quieren establecer un proyecto de “turismo ecológico”, admiran el “sentido empresarial” de ex combatientes en El Salvador y explican que el ingreso debe depender del trabajo realizado, sin prever ningún sistema de protección o apoyo para personas que no pueden trabajar, sea esto por enfermedades o por edad avanzada.

Las actas de las reuniones de la Alianza por lo general son escritas por extranjeros miembros del CIEP quienes de esta manera generan la “memoria oficial” de dichos eventos. La relación estrecha entre el CIEP y la ANN perpetua la relación jerárquica de los ex-combatientes frente a

las comunidades, y dentro del CIEP son los extranjeros quienes controlan el acceso a los recursos económicos desde afuera y privilegian la ANN sobre las comunidades. El CIEP se originó en 1984 en México por dirigentes sindicales guatemaltecos en el exilio y se instaló en Guatemala en 1993. En sus “Conceptos Básicos” del año 1990, el CIEP elabora su fundamento ideológico que está basado en fragmentos del marxismo, mostrando por un lado un rechazo profundo al Estado que “tiene que llegar a desaparecer” y por otro lado hostilidad y desconfianza frente a la población campesina la cual se percibe como “pequeña burguesía” que “quiere ser burguesía” y “no tiene un proyecto de sociedad propio porque no es una clase fundamental”.

En contraste con esta percepción, en las comunidades rurales se practican sistemas económicos alternativos. Llama la atención el ejemplo del caserío Salvador Fajardo, una comunidad de aproximadamente 50 familias con una historia muy especial y trágica: muchos de sus miembros, en su mayoría mestizos, huyeron de los masacres del ejército a principio de los años ochenta del siglo pasado. Se refugiaron a la selva donde poco a poco empezaron a organizarse de manera colectiva, la única manera para poder sobrevivir en la selva tropical y bajo la amenaza permanente del ejército. En 1991, con la última ofensiva del ejército, esta población desarraigada se declaró como Comunidades Populares de Resistencia Petén (CPR-P) y decidió salir a la vida pública. Después de negociaciones largas y difíciles con el gobierno, recibieron una finca en 1998. Cuando la CPR-P salió de la selva para vivir en este terreno, algunos de sus miembros habían pasado hasta 18 años en la selva. Los jóvenes no conocían ni carros ni dinero, y muchos adultos no conocían el valor actual de la moneda nacional. En la selva y bajo el terror per-

manente, los habitantes habían sido forzados a desarrollar una “comunidad colectiva cerrada”, en la cual la supervivencia dependía del trabajo comunitario y del apoyo mutuo. Asentados en la nueva finca, los habitantes entraron en el proceso de adaptación a un estilo de vida mucho más individualista de una comunidad “normal” petenera.

Comparando la vida en la selva y en el caserío, varios padres y madres de familia se quejan de los efectos negativos de la monetarización creciente. Cuentan que en la selva todo se compartía porque no había qué comprar y no se usaba el dinero. Hablan de la dificultad de resistir a la propaganda para tantos productos y, más difícil aún, transmitir esta resistencia al consumo de comida chatarra y otros productos dañinos a sus hijos. Varios de los habitantes del caserío siguen practicando una generosidad solidaria y amplia: comparten frutas, miel, conocimientos, masaje, curación o dinero según las posibilidades, e intercambian bienes igual como servicios. En el caserío, el dinero no es el único medio de intercambio, y no es el más privilegiado.

Por supuesto, también los campesinos del caserío necesitan dinero para libros escolares, ropa, servicios de salud, medio de transporte, etc. y el dinero es escaso. Las pocas oportunidades para ganar dinero o generarlo de otra manera facilitan que la corrupción se vuelva un problema constante. Igual como las instituciones estatales, los partidos y las ONGs, el caserío no ha encontrado formas para frenar la desviación de dinero. Tampoco todos los miembros del caserío participan en las redes de generosidad solidaria y amplia. Sin embargo, esta clase de generosidad o este sistema económico alternativo es visible y palpable en la comunidad.

La economía neoliberal empuja sobre todo la monetarización y comercialización

de todas áreas de la vida, o, como dirían los marxistas, transforma toda forma de tierra, trabajo y capital en mercadería. Y esto es exactamente lo contrario de lo que se practica en ciertos sistemas rurales de intercambio económico.

### **¿Cómo apoyar la “globalización desde abajo”?**

A pesar de una preocupación generalizada por la globalización económica neoliberal, la Alianza por la Vida y la Paz, que es la organización predominante en este tema, y el CIEP como su “gabinete estratégico” (junto con la ANN) no logran transformar el descontento en acción. De esta manera se corresponde a sus propios principios según los cuales a la población campesina no le corresponde un papel protagonista en la lucha. Pero dado que el apoyo internacional se canaliza a través de ONGs, comunidades como la CPR-P tienen mucho menos posibilidades de un apoyo directo que ONGs como el CIEP.

Los datos de la investigación sugieren que para encontrar “las miles de alternativas” al neoliberalismo de las cuales habla Susan George, es necesario desarrollar formas críticas de colaboración con y entre ONGs, cuestionar el poder de los “líderes” extranjeros y nacionales frente a sus “beneficiarios”, y reconocer que las ONGs también forman parte de las dinámicas económicas neoliberales. Además, urge desarrollar métodos y marcos teóricos para detectar estos sistemas económicos diferentes, para poder analizarlos en colaboración con los actores y para colaborar en deducir las posibilidades para contrarrestar la monetarización de todas esferas de la vida. No en último término es necesario encontrar formas para recomponer a los actores que ponen estos apor-

tes de conceptos y modelos de vida a disposición. De otra manera, las miles de alternativas existentes fácilmente serán apagadas por las misiones, visiones, declaraciones y hasta por la admiración al “sentido empresarial” de las ONGs.

*Eva Kalny es doctora de antropología social por la Universidad de Viena. Actualmente lleva a cabo un proyecto de investigación sobre movimientos sociales, derechos humanos y globalización en el Petén, Guatemala, financiado por el Ministerio Federal de Educación, Ciencia y Cultura de Austria.*